

Más de 17 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria por el cambio climático

La falta de agua y los eventos climáticos extremos ya tienen consecuencias sobre cultivos, productores y consumidores. Sequías, heladas, lluvias extremas y una creciente presión sobre los recursos hídricos ponen en riesgo el abastecimiento de alimentos

POR BRYAM ESQUEN

besquen@stakeholders.com.pe

El cambio climático y la escasez de agua dejaron de ser amenazas futuras para convertirse en realidades que golpean la producción de alimentos en el Perú y América Latina. Sequías prolongadas, heladas erráticas, inundaciones y temperaturas extremas reducen los rendimientos agrícolas, elevan los costos de producción y ponen en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Sus efectos recaen especialmente sobre la agricultura, uno de los sectores más vulnerables frente a la crisis climática. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que, en 2025, el 51,7% de los peruanos enfrentaba inseguridad alimentaria, equivalente a 17,6 millones de personas.

En el Perú, esta vulnerabilidad se cruza con una creciente presión sobre los recursos hídricos y con la exposición a eventos climáticos extremos. Según un estudio elaborado por Oxfam, Fomento de Vida (FOVIDA) y la Confederación Nacional Agraria, los fenómenos climáticos extremos están afectando cultivos esenciales como el haba, la papa y el maíz en Junín, Huancavelica y Cusco.

El documento recoge además que la producción agrícola peruana cayó 4,1% en 2023, la peor cifra en más de 30 años, según el Instituto Peruano de Economía; mientras que más de 1,6 millones de hectáreas en 328 distritos estaban en riesgo por las heladas, de acuerdo con el CENEPRED. En este escenario, Stake-



Mario Salazar

Representante la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF)

holders conversó con especialistas como Bruno Portillo, académico en gestión ambiental, Mario Salazar, representante la Asociación de Empresas Familiares del Perú (AEF), y Daniela Osoreo, gerente del Banco de Alimentos Perú, quienes explican cómo la crisis climática está transformando la producción de alimentos y qué estrategias se requieren para fortalecer la seguridad alimentaria.

El cambio climático dejó de ser una amenaza futura en el Perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) señaló que, en 2025, los fenómenos climáticos en el país pusieron en riesgo la seguridad alimentaria de unas 300.000 personas, principalmente agricultores y ganaderos.

Para Mario Salazar, representante de AEF, el cambio climático ya forma

parte de las decisiones cotidianas de la agroindustria. “Para una empresa agroindustrial familiar esto es especialmente importante porque trabajamos con inversiones de largo plazo”, señala. El aumento o descenso de las temperaturas, las lluvias fuera de temporada y los cambios en la disponibilidad de agua afectan los rendimientos, la calidad de los productos y las ventanas de cosecha, con consecuencias sobre la capacidad de las empresas para cumplir con los mercados internacionales.

La advertencia adquiere relevancia en un sector que trabaja con inversiones de largo plazo. Un cultivo permanente no puede trasladarse rápidamente cuando cambian las condiciones climáticas. Por ello, Salazar considera que el agua, la ubicación de las inversiones y la capacidad de adaptación están adquiriendo un peso cada vez mayor en la competitividad. “Hoy no necesariamente será más competitiva la empresa que produzca más barato, sino aquella que pueda producir de manera predecible frente a un clima cada vez menos predecible”, afirma.

La evidencia muestra que la escasez hídrica ya tiene consecuencias económicas concretas. Bruno Portillo, profesor de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, cita el caso de la campaña agrícola 2024 y 2025 en Piura. El corte del suministro de agua desde la represa de Poechos durante más de 70 días generó pérdidas estimadas en más de S/82 millones y

afectó cerca de 11.000 hectáreas durante los primeros tres meses de la campaña, principalmente de arroz y maíz amarillo duro.

El caso de Poechos muestra que la seguridad alimentaria no depende solo de eventos extremos. Una sequía puede comprometer una campaña agrícola sin lluvias intensas o inundaciones. En ese escenario, la disponibilidad del agua resulta clave para sostener la producción y preservar los ingresos de las familias rurales.

Portillo señala que la agricultura familiar, que según su referencia aporta el 83% de los alimentos consumidos en el país, es también una de las actividades más expuestas. Un estudio citado por el especialista sobre Junín, Huancavelica y Cusco documenta efectos de las heladas, las lluvias erráticas y las sequías sobre cultivos como haba, papa y maíz, además de un incremento de los costos por la mayor incidencia de plagas.

Los datos oficiales permiten dimensionar el peso de este sector desde otra perspectiva. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) señala que la agricultura familiar representa el 97% de las unidades agropecuarias del país y que más del 83% de los trabajadores agrícolas participan en este sistema productivo. El propio ministerio la reconoce como base de la seguridad alimentaria.

Menos agua, más riesgo para producir

El agua representa uno de los principales puntos de presión sobre la agricultura. Portillo recuerda que Perú ha perdido cerca de la mitad de su superficie glaciar en los últimos 70 años, situación que reduce la disponibilidad de agua durante la época seca para zonas de la sierra y para valles costeros que dependen de esas cuencas.



Daniela Osoreo
Representante del Banco de Alimentos del Perú



Bruno Portillo
Profesor de Economía y Gestión Ambiental de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya

La vulnerabilidad no es igual en todo el territorio. El especialista identifica como especialmente expuestos frente a las sequías a los cultivos de secano de la sierra, entre ellos maíz amiláceo, papa, cebada y trigo, debido a su dependencia de las lluvias estacionales. En la costa, menciona cultivos con altos requerimientos de agua, como arroz, espárrago, palta y caña de azúcar. Frente a las inundaciones, papa, camote y yuca presentan una especial vulnerabilidad por el exceso de agua en el suelo. En la costa norte, además, cultivos como palta, arándano, mango y limón pueden sufrir pérdidas por anomalías térmicas asociadas a El Niño incluso sin lluvias extremas.

La amenaza tiene también una dimensión productiva y financiera.

Salazar explica que los eventos extremos generan costos visibles, como reparación de infraestructura, drenajes, bombeo, protección de cultivos, mayor utilización de insumos y reprogramación de cosechas. Sin embargo, existen otros costos menos evidentes, como la reducción del rendimiento por hectárea, la pérdida de condición exportable, las interrupciones logísticas, los incumplimientos comerciales y la necesidad de disponer de mayor capital de trabajo.

“Por eso, el riesgo climático termina convirtiéndose en riesgo financiero”, sostiene Salazar. Una reducción relativamente pequeña del rendimiento puede afectar de manera considerable la utilidad de una empresa, debido a que buena parte de los costos se ejecuta antes de la cosecha. Si los eventos extremos se repiten, también pueden afectar la capacidad de endeudamiento, inversión y crecimiento de las empresas agrícolas.

La pérdida de producción no termina en el campo. Daniela Osoreo, representante del Banco de Alimentos del Perú, advierte que el cambio climático afecta la producción, la distribución y los ingresos de las personas. Cuando disminuye la oferta o aumentan los costos, los precios pueden subir y reducir la capacidad de compra de los hogares vulnerables.

“Estamos hablando también de cultivos que no llegan a ser cosechados, ganadería, agricultura, la pesca”, explica Osoreo. Para las poblaciones vulnerables, el problema se extiende a las fuentes de ingresos que permiten acceder a los alimentos.

El escenario internacional confirma esa relación entre fenómenos climáticos y seguridad alimentaria. En agosto de 2026, un análisis del Programa Mundial de Alimentos

señaló que un El Niño fuerte podría empujar a 49 millones de personas adicionales hacia la inseguridad alimentaria aguda hasta finales de 2027. El organismo estimó que el número de personas afectadas podría alcanzar aproximadamente 274 millones en 45 países vulnerables.

En Perú, el riesgo se vuelve especialmente relevante ante la previsión de un nuevo periodo de intensificación de El Niño. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha identificado provincias agrícolas del norte entre las zonas con mayor vulnerabilidad, mientras que el sur andino podría enfrentar condiciones de sequía.

La adaptación no depende exclusivamente de infraestructura agrícola. Osorio destaca otra dimensión de la seguridad alimentaria: aprovechar los alimentos que ya fueron producidos y que todavía son aptos para el consumo.

El Banco de Alimentos trabaja con empresas para recuperar productos que ya no pueden comercializarse. La organización incluso evalúa realizar directamente la cosecha de cultivos que una empresa decide no recoger porque dejaron de tener valor comercial, pese a que todavía pueden destinarse al consumo.

La logística es fundamental en este proceso porque muchos alimentos son altamente perecederos y tienen una vida útil corta. El Banco de Alimentos exige que los productos se encuentren en condiciones adecuadas para el consumo y, cuando necesitan refrigeración, que las organizaciones receptoras puedan mantener la cadena de frío.

La participación empresarial también se extiende a la gestión del agua. En abril de 2025, la Autoridad Nacional del Agua impulsó el Compromiso Azul, vinculado al Certifi-

cado Azul, para promover prácticas de gestión responsable del recurso hídrico en el sector privado. La ANA informó entonces que el programa había permitido ahorrar más de seis millones de metros cúbicos de agua y que las empresas habían destinado más de S/140 millones a mejoras operativas y obras sociales.

Para Salazar, la adaptación puede convertirse incluso en una fuente de innovación. Menciona nuevas variedades, agricultura de precisión, automatización, información climática y sistemas de riego más eficientes. La sostenibilidad, desde su perspectiva, deja de ser únicamente un componente reputacional y puede convertirse en una condición de acceso a determinados mercados internacionales.

La respuesta busca ahorrar y almacenar agua

Frente a este escenario, el Estado ha concentrado parte de sus esfuerzos en mejorar la eficiencia hídrica. En marzo de 2026, MIDAGRI anunció una inversión superior a S/69 millones para ejecutar 20 proyectos de riego tecnificado durante el año. Las intervenciones incluyen sistemas de

aspersión, goteo y multicompuertas, además de asistencia técnica y fortalecimiento de organizaciones de usuarios de agua.

En mayo, el ministerio reportó que durante el primer trimestre ya se habían puesto en marcha 17 obras con una inversión de S/66,6 millones. Las intervenciones abarcan 1.600 hectáreas y benefician a más de mil familias; diez obras estaban concluidas y siete permanecían en ejecución. Los cultivos involucrados incluyen palto, papa, quinua y café.

La estrategia también adquirió un respaldo normativo. En septiembre de 2025 se promulgó la Ley 32437 de Riego Tecnificado, orientada a promover el uso eficiente del agua mediante inversiones en sistemas de riego. En marzo de 2026, MIDAGRI aprobó su reglamento mediante el Decreto Supremo 0002-2026-MIDAGRI.

Para Salazar, estas medidas responden a una necesidad empresarial concreta. Entre las prácticas que considera más efectivas menciona el riego tecnificado, el monito-



reo de humedad, los reservorios, el mantenimiento de infraestructura y la medición permanente de la eficiencia. También plantea que las empresas deben dejar de reaccionar únicamente cuando ocurre una emergencia y empezar a trabajar con escenarios climáticos, información meteorológica y protocolos de respuesta.

La inversión pública también ha llegado a las zonas altoandinas. En septiembre de 2025, MIDAGRI informó que el proyecto Andes Resilientes al Cambio Climático había beneficiado a más de 83.000 familias productoras en ocho regiones. La intervención acumulaba más de S/213 millones e incluía 136 qochas, 263 reservorios, más de 3.300 kilómetros de zanjales de infiltración, recuperación de 21.000 hectáreas de praderas y la plantación de 800.000 árboles.

La infraestructura busca responder a una realidad que Portillo considera territorial. “Algunas áreas serán más resilientes con la adopción de riego tecnificado; otras, con protección de cauces; otras, con fuentes alternativas de agua”, explica. Por ello, plantea que las estrategias de adaptación deben responder a las características de cada territorio y contar con participación de los propios agricultores.

Prevenir antes que reconstruir

La prevención aparece como uno de los principales desafíos. Salazar considera que el Estado debe reducir las vulnerabilidades estructurales antes de que ocurra una emergencia. Entre las prioridades menciona infraestructura hídrica, mantenimiento de ríos y quebradas, mejores sistemas de información, alertas tempranas, inversión preventiva y mecanismos financieros que permitan recuperarse rápidamente después de un evento extremo. “El Estado no puede controlar

el clima, pero sí puede reducir enormemente el costo económico que genera un evento climático. Y prevenir siempre será menos costoso que reconstruir”, afirma.

El Seguro Agrícola Catastrófico constituye una de las herramientas disponibles. Para la campaña 2025 y 2026, MIDAGRI informó que el seguro gratuito, financiado íntegramente por el Estado, cubría más de dos millones de hectáreas en las 24 regiones y otorgaba una indemnización de hasta S/1.000 por hectárea ante eventos como inundaciones, lluvias torrenciales, sequías, heladas, granizo, plagas y enfermedades.

familias a los alimentos. El próximo episodio de El Niño añade presión a un sistema que ya enfrenta vulnerabilidades diferenciadas según cada territorio. El reto no consiste únicamente en aumentar la producción, sino en lograr que esa producción pueda sostenerse frente a condiciones climáticas cada vez menos previsibles.

Las respuestas ya están en marcha. El Estado invierte en riego tecnificado, reservorios y recuperación de infraestructura; también cuenta con mecanismos de aseguramiento y programas de adaptación altoandina. Las empresas incorporan

“LA EMPRESA QUE APRENDA A PRODUCIR DE MANERA PREDECIBLE FRENTE A UN CLIMA CADA VEZ MENOS PREDECIBLE TENDRÁ UNA VENTAJA COMPETITIVA”.

Portillo considera, sin embargo, que existe espacio para mejorar este mecanismo. Señala que una indemnización fija por hectárea no siempre refleja la pérdida real ni las diferencias de vulnerabilidad entre cultivos y territorios. Por ello, plantea ampliar la cobertura y ajustar los criterios de indemnización según la zona y el tipo de cultivo.

También propone conectar los sistemas de alerta temprana con mecanismos de respuesta que permitan actuar antes de que ocurra el daño. Su planteamiento incluye seguros paramétricos, reservas alimentarias y apoyo monetario directo activados a partir de pronósticos climáticos. “La ayuda no dependa de que el Estado reaccione después del daño, sino de que se anticipe a partir de los pronósticos climáticos ya disponibles”, sostiene.

Las evidencias muestran que el cambio climático está afectando simultáneamente la disponibilidad de agua, los rendimientos agrícolas, los costos empresariales y el acceso de las

tecnologías de eficiencia hídrica y participan en iniciativas de gestión responsable del agua; organizaciones como el Banco de Alimentos buscan reducir las pérdidas y redistribuir productos que todavía pueden consumirse. Sin embargo, la escala del desafío exige que estas acciones dejen de funcionar como esfuerzos aislados.

La conclusión de Salazar resume el cambio que enfrenta el sector: “La empresa que aprenda a producir de manera predecible frente a un clima cada vez menos predecible tendrá una ventaja competitiva”. Para Portillo, esa adaptación requiere anticipación, ciencia y respuestas diferenciadas según cada territorio. Para Osorio, también exige evitar que los alimentos que todavía pueden consumirse terminen fuera del alcance de quienes los necesitan. La seguridad alimentaria peruana dependerá, en buena medida, de la capacidad del país para unir esas tres dimensiones antes de que el próximo evento extremo convierta nuevamente la vulnerabilidad en pérdidas.